INTRODUCCIÓN

Es grato poder desarrollar una exposición racional de la etapa preliminar o etapa de investigación, exclusivamente la fase de investigación informal o no judicializada dentro del sistema penal acusatorio adversarial y oral, en el entendido de que cada una de las manifestaciones y actuaciones tienen plena ciencia y racionalidad y atienden al principio epistemológico, y dan cumplimiento al de lealtad y buena fe.

He ahí que nuestras actuaciones como operadores del sistema son puntuales, y con la intención de no atentar contra el dinamismo de las intervenciones en los momentos procesales de la audiencia y de cada etapa del sistema penal. Las manifestaciones de las partes deben ser con tal grado de razonamiento, que el juez de control o tribunal oral se convenzan de que lo que pretendemos está fundamentado, y atiende un actuar con bases epistemológicas al cien por ciento.

La finalidad del presente trabajo es dar elementos fundamentales de argumentación para un buen manejo en las actuaciones de esta etapa preliminar; tan es así, que es necesario que el juez de control, quien vive ese encuentro personal entre las partes, como lo pondera el nuevo sistema penal, es quien más conoce de los nuevos estatutos de argumentación jurídica, y manifiesta lo conducente y propio a la naturaleza de las actuaciones; de ello se diferencia el dominio en la conducción de las audiencias, específicamente de la violación de derechos humanos a las partes, dígase del ofendido o víctima, y del imputado.

La dinámica de nuestro trabajo es dar pautas para un análisis exhaustivo de actuaciones e intención superior de realizar determinaciones, además de contemplar la resolución de los momentos procesales importantes, como es la pronunciación, bajo la ra-

zón del control de detención legal o ilegal; del dictamen del auto de vinculación a proceso; de la resolución de algún acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso a prueba, e incluso algún pronunciamiento a la resolución, ante la inconformidad por parte del ofendido o víctima, al criterio de oportunidad; más aún cuando se resuelve el debate de alguna medida cautelar, la cual, es fundamental que, bajo la lógica jurídica, se visualice, en el perfil de la misma, para no ser violatorio de derechos humanos.

Atendiendo a la razón, es verosímil que el pronunciamiento para el órgano jurisdiccional se respete y contemple el principio de contradicción de las partes, pues de lo contrario serían actuaciones infundadas y no serían propias, ya que violarían el principio de igualdad procesal, mismo que no es posible, en el entendido de que el principio de contradicción genera el debate; sin embargo, aun habiendo debate, y no se atendió, el órgano jurisdiccional incurre en un error grave, y que consideramos una mala actuación por parte de éste.

Así mismo, es menester que las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, sean convincentes en su actuación fundamental; atendiendo a lo anterior, es importante que no se violen los derechos humanos de los representados, que en el caso de la fiscalía, debe ser altamente capaz de ponderar argumentos viables en honor a la protección de los intereses del ofendido. Por ello es que si existen varios compañeros de la fiscalía en una misma audiencia, y el que esté pregonando las peticiones en los momentos procesales no sabe conducirse con debido razonamiento, y que incluso no sepa ni qué manifestar, es viable pedir a otro compañero que sea quien continúe las manifestaciones; pero si alguno de los acompañantes no sabe hacerlo, o no tiene conocimiento para argumentar, entonces puede solicitar el apoyo a otros más de la procuraduría o de la fiscalía, y cambiarse en atención a los derechos humanos de aquellos que representan, para no perjudicar al ofendido o víctima, y atendiendo al principio de unidad, por supuesto que es viable y conducente.

También es viable que la defensa sea sustituida, pues si no conoce argumentación jurídica y no sabe pronunciarse en la audiencia, es oportuno que se remueva, en atención al principio de defensa técnica y adecuada, ya que no puede permitirse que este principio se viole al tenor de la protección de los derechos humanos del presunto.

Si el órgano jurisdiccional no atiende a lo manifestado por la defensa, y además viola los derechos humanos del representado, naturalmente que, bajo la luz de la razón y con la intención superior de no estar vulnerando la esfera jurídica de los representados, sea el ofendido, víctima o el imputado; ante esta situación, es viable que cualquiera de las partes solicite la remoción del juez de control o del presidente del tribunal oral, ante los incidentes de excusación o recusación; luego, estamos ante un sistema que debe funcionar bien y debe dar frutos, con todo lo añorado, en el espíritu de la reforma constitucional.

He aquí que nos damos a la tarea de trabajar la argumentación jurídica en la etapa preliminar, estableciendo también reglas de litigio, que el órgano jurisdiccional, la fiscalía, la defensa pública o particular deben dominar para intervenir, conforme lo exige la epistemología jurídica del nuevo sistema penal acusatorio adversarial y oral.

Por ello, el cumplimiento a los estatutos establecidos en cada uno de los principios que rigen el sistema penal acusatorio se deben aplicar, respetar y valorar en cada uno de los momentos procesales de la audiencia preliminar, intermedia o de debate ante el juicio oral.

La aplicación se da en tanto se hace valer en el momento oportuno, porque puede precluir el derecho para validarlo, en el entendido de que no puede violarse en ninguna circunstancia, además de valorar que se atienda a lo manifestado para efectos mayores de dictaminar o pronunciarse a resolver el momento procesal que se esté desarrollando.